

A causa del Beagle

El Papa no visitó Chile y Argentina

Hernán Uribe

Las juntas militares de Argentina y Chile, los altos mandos castrenses y sus asesores diplomáticos dedican en estos días largas horas al estudio del conflicto del canal de Beagle que durante casi tres años ha empeorado sus relaciones a niveles peligrosos. El 16 de julio se inició en el Vaticano la octava ronda de conversaciones y ahora las partes deberán opinar sobre una fórmula inicial de arreglo propuesta por el papa Juan Pablo II a través de su representante, el cardenal Antonio Samoré.

El 17 de junio pasado, Samoré y las delegaciones de ambos países emitieron el último comunicado oficial. El documento señala que después de siete rondas de conversaciones que abarcan unas 200 reuniones iniciadas en mayo de 1979, "se ha podido llegar a un mejor conocimiento de las distintas posibilidades que se ofrecen ahora para tratar los temas fundamentales en la forma más adecuada". De la ambigüedad de esta redacción sólo se pudo deducir que ha terminado la etapa informativa y que las partes deberán pronunciarse en adelante sobre puntos concretos. Los círculos diplomáticos no visualizan en todo caso una solución a corto plazo y se asegura que la intransigencia de las partes impidió que el viaje de Juan Pablo II al Brasil se extendiera a Chile y Argentina. Sin arreglo, aquella visita habría sido observada sólo como un respaldo a las dictaduras que imperan en esos países australes.

Cuando el 6 de junio el papa recibió al cardenal Samoré, *Il Giornale Nuovo* de Milán dijo que se había logrado un acuerdo y que Juan Pablo II avalaría su firma en Buenos Aires y en Santiago. La versión, empero, fue desmentida enfáticamente por el coronel Ernesto Videla, subsecretario de Relaciones Exteriores de Pinochet, en tanto que el general Leopoldo Galtieri, comandante en jefe del ejército argentino se limitó a proclamar que "la tesis argentina no ha variado". La difícil mediación papal se enfrenta, pues, a altas vallas.

El conflicto acerca de la soberanía en el canal de Beagle —sito al sur del Estrecho de Magallanes— y sus islas es tan antiguo como la

historia independiente de Argentina y Chile, pero su agudización es de estos años. En julio de 1971, los presidentes Allende y Lanusse resolvieron someterlo a un fallo arbitral de la Corona Británica. El laudo, como se llaman en jerga jurídica las decisiones arbitrales, fue emitido el 18 de febrero de 1977 y comunicado a las partes el 2 de mayo de ese año. La corte arbitral entregó a Chile la soberanía sobre las islas Picton, Nueva y Lennox y con ello de hecho sobre el canal mismo. Así, no modificó realmente la situación existente, pero desechó las reivindicaciones argentinas.

En un gesto casi sin precedentes en la historia del derecho internacional, Argentina cogió al toro por los cuernos y el 25 de enero de 1978 desconoció oficialmente el laudo con el argumento de que contrariaba el Tratado Chileno-Argentino sobre Límites de 1881, que en la práctica estableció que en el extremo sur, Argentina tendría soberanía marítima sólo en el Atlántico, así como Chile únicamente en el Pacífico. El convenio, firmado en el fragor de la Guerra del Pacífico que Chile sostenía con el Perú y Bolivia, fue una transacción, pues el primero perdió por el mismo sus territorios patagónicos, pero conservó sus derechos exclusivos sobre el estratégico Estrecho de Magallanes. Al decretar el ya admitido mar de 200 millas, sostuvo Buenos Aires, Chile llegaría hasta su zona propia, el Océano Atlántico.

El de 1978 fue así un año crítico, en el que a falta de instrumentos pacíficos para buscar un arreglo, a uno y otro lado de la cordillera comenzaron las amenazas, paralelas a los aprestos bélicos. Argentina aprovechó las contradicciones de Chile con sus vecinos y logró armar un potencial eje Buenos Aires-La Paz-Lima que actuaría unido en caso de una

guerra. Suprimidas en las dos naciones todas las libertades públicas, los pueblos eran testigos mudos del agravamiento de una querrela que podía culminar en una masacre fratricida. Fue en esos momentos, a finales de 1978, cuando los gorilatos se preparaban para una guerra real, que surgió la iniciativa mediadora del Vaticano y en la cual, según testimonios periodísticos, tuvo activa participación Estados Unidos.

A falta de una opinión pública con capacidad de expresión, ese espacio vacío ha sido cubierto en parte por la Iglesia Católica de los 2 países. Dependientes ambas del mediador (y en Argentina unida al Estado), desde 1978 han realizado campañas pacifistas, intercambio de delegaciones, y de las misas y oraciones han pasado a los actos masivos de envergadura. Pero he aquí otro escollo. Las relaciones del régimen con parte de la iglesia no son buenas en Argentina, y en Chile son francamente malas en forma general, pues aquí la jerarquía ha rechazado con decisión la violación de los derechos humanos. La enemistad oficial hacia la iglesia se ha manifestado en encarcelamiento de sacerdotes, acusaciones de infiltración marxista y en episodios ignominiosos como la voladura con explosivos del sepulcro de los padres del cardenal Silva Henríquez.

Desde otro ángulo se afirma, con razón, que una propuesta papal deberá ser necesariamente distinta al laudo, lo que supone desistimiento de las partes. En este plano se especula con fórmulas como la cesión de las islas a Chile, pero la renuncia de éste a un mar patrimonial hacia el oriente para que no alcance al Atlántico; con el mismo objetivo se habla de una división por mitades de la isla Nueva y hasta del Cabo de Hornos, lo que supone otra

complicación por su proyección hacia la Antártida. Mientras tanto, el clima psicológico no es propicio, pues en tanto el siempre parlanchín almirante José Toribio Merino (jefe de la armada chilena y miembro de la Junta) ha declarado que "los argentinos siguen violando nuestra soberanía sistemáticamente", Chile ha reanudado un suspendido comercio con las islas Malvinas, bajo la soberanía británica y siempre reivindicadas por Argentina.

Julio, apuntan los expertos, será un mes decisivo. En los próximos días se reiniciará en San Pedro la medieval escena de las delegaciones argentina y chilena reunidas con el cardenal Samoré, poseedor también de un título añejo: director del Archivo Secreto del Vaticano y descrito como un expertísimo diplomático. En una sala de la llamada *Casita de Pío IV*, construida en 1500, rodeados de imágenes y estatuas religiosas, los delegados ocupan distintos lados de una mesa rectangular. A la cabeza, Samoré, quien inicia la sesión con una oración y en seguida ofrece la palabra. Los que hablan, generalmente los delegados jefes, el argentino Guillermo Moncayo y el chileno Enrique Berstein, se dirigen siempre al cardenal, jamás a sus reales interlocutores. . . Samoré y su ayudante, el cura español Faustino Sáez, toman nota y el primero, en la próxima sesión, trata de conciliar informaciones y opiniones. Sin embargo, el asunto es muy serio como para que se convierta en un paso de comedia.

Las mediaciones papales no son nuevas si partimos de aquella célebre *concesión* que en 1493 otorgó Alejandro Borgia a España y Portugal para conquistar tierras al Este y al Oeste del meridiano 60. Ciertamente es que pasaron al olvido los tiempos en que el papado era también una potencia terrenal, aunque conserva, acrecentada por el polaco Juan Pablo II, su influencia político-moral. Ella sí puede estrellarse mañana con la característica irracionalidad de quienes usurparon el poder en Argentina y Chile.